

RÉPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	i) Nasareth Urrego Monares ii) Ketty Lorena Herrera Ricardo y iii) Paula Viviana Noriega Zapata
DEMANDADAS	i) ESE Hospital Marco Fidel Suarez, ii) Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación-Corponal-
LLAMADA EN GARANTÍA	Seguros del Estado S.A.
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 015 2017 00987 01
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Revoca
ACTA DE DECISIÓN	092 de 2021

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la demandada ESE Hospital Marco Fidel Suarez, contra la decisión del 2 de octubre de 2020 que niega decreto de prueba testimonial.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Con la demanda se pretende que se declare la responsabilidad solidaria de las demandadas frente a las acreencias laborales de las demandantes, y se les condene solidariamente al pago de estas. A lo cual se opone la accionada ESE Hospital Marco Fidel Suárez alegando la inexistencia de vínculo laboral, inexistencia de responsabilidad solidaria, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, responsabilidad de un tercero, entre otros fundamentos de defensa.

Entre las pruebas solicitadas por la accionada ESE Hospital Marco Fidel Suarez, se pidió la prueba testimonial, la cual fue negada por la A quo en la audiencia del 2 de octubre de 2020, conforme al artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social¹, al considerar que lo pretendido con esta puede ser dilucidado con la prueba documental obrante en el expediente. Agregó que, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso², es una prueba ilegal en tanto no se dice el objeto del pleito o el objeto de prueba.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez presentó recurso de reposición y en subsidio apelación indicando que, si bien no aparece expresamente manifestada la razón o el objeto de la práctica de la prueba como lo estipula el artículo 212 del C.G.P., ello es una falencia de tipo procesal que no puede dejar al Hospital en una condición de desequilibrio probatorio frente a asuntos que van más allá de lo documental, y que necesitan de la práctica de la prueba testimonial, a saber, las condiciones, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que efectivamente las demandantes prestaron el servicio a favor de la Corporación Nacional de Trabajo, Salud y Educación-Corponal. Solicita se reponga y acceda a la práctica de dicha prueba.

La a quo no repuso la decisión insistiendo en que se trata de una prueba ilegal al no precisarse el objeto del pleito de la prueba. Y concedió el recurso de apelación.

¹ En adelante C.P.T y de la S.S.

² En adelante C.G.P.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si bajo las normas procesales del derecho laboral es procedente negar el decreto de la prueba testimonial solicitada por la accionada, ESE Hospital Marco Fidel Suárez, en razón a la falta de enunciación de su objeto.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la competencia de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

La a quo negó el decreto de la prueba testimonial con base en el artículo 53 del CPT y de la S.S., el cual indica que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. Ahora, el juez de conocimiento debe analizar y determinar si las pruebas allegadas o solicitadas por las partes cumplen con los presupuestos de licitud, utilidad, conducencia y pertinencia, en relación con el objeto del debate para proceder o no a su decreto y práctica.

Frente a estos requisitos, indicó el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A³, ha expresado:

“Al respecto, esta Corporación ha definido los anteriores requisitos indicando que la conducencia de la prueba «apunta a determinar si el medio probatorio solicitado resulta apto jurídicamente para acreditar determinado hecho. Por su parte, la pertinencia de la prueba se puede definir frente a los hechos alegados en el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del libelo y, finalmente, la utilidad o eficacia de la prueba lo constituye el efecto directo dentro

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número: 25000-23-25-000-2015-00006-01(1556-17) del 8 de marzo de 2019.

del juicio que informa al juez sobre los hechos o circunstancias pertinentes y que, de alguna manera, le imprimen convicción al fallador»⁴.

La a quo también fundó su negativa en el artículo 212 del C.G.P., norma de la que se infiere que el decreto de la prueba testimonial se encuentra sujeta a dos condicionamientos: i) indicación del nombre, domicilio y lugar de residencia del testigo y, ii) la enunciación concreta de los hechos objeto de prueba.

En este caso, en el acápite de pruebas de la respuesta a la demanda presentada por la ESE Hospital Marco Fidel Suarez se indicó:

“Con el fin de dar por probado los hechos en los cuales se fundamente la presente defensa, se solicita el decreto de los siguientes medios:

(...)

Testimonial:

- CATALINA MEJIA CANO (...)
- ZAIRA RAMIRS ZAPATA (...)
- ALEJANDRA MARIA HENAO MUÑOZ (...)
- LUZ DOLLY HURTADO ARANGO (...)
- NANCY DEL SOCORRO SERNA URREGO (...)

En primer termino el artículo 53 del CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, trae expresa las condiciones para el rechazo, por parte del Juez, de las pruebas y diligencias, permitiendo ello en razón a que resulten inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito, situación que no presenta en el caso planteado, como se indicará más adelante.

Adicional a lo anterior, considera la Sala que si se analiza el tema, bajo la norma del Código General del Proceso antes citado, claramente la ESE indicó que el objeto de la prueba testimonial es probar los hechos en los cuales fundamentó su defensa, la cual cimentó en la inexistencia de vínculo laboral, inexistencia de responsabilidad solidaria,

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, consejero ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, auto de 27 de abril de 2017, radicado: 4100123310002010000520 03 (58.640), actor: INCOPAV S.A. – INSCO LTDA.

inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, responsabilidad de un tercero, entre otros fundamentos.

Además, al solicitar la prueba informó el documento de identidad y dirección de cada testigo anunciado, evidenciándose que se cumple con las condiciones exigidas en la norma. Además, que la prueba testimonial resulta i) conducente al ser apta jurídicamente para acreditar las condiciones específicas bajo las cuales las demandantes prestaron sus servicios en favor de la ESE Hospital Marco Fidel Suarez. ii) Es pertinente porque, los hechos alegados en el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del libelo aluden a la labor desarrollada por las demandantes en la ESE Hospital Marco Fidel Suarez, esto es las funciones específicas que realizaron así como a la situación análoga de estas frente al personal de planta de dicha entidad, y el contexto dentro del cual se dio el incumplimiento de las obligaciones prestacionales para con estas. Lo cual debe demostrarse para efectos del reconocimiento de las pretensiones, y iii) es útil o eficaz por el efecto directo de las declaraciones dentro del juicio, las cuales le informaran al juez sobre los hechos o circunstancias pertinentes dándole convicción al fallador.

De otra parte, las demás pruebas decretadas por la a quo, no impiden el decreto y practica de los testimonios. Contrario sensu, ante la inexistencia de tarifa legal probatoria para demostrar las pretensiones de la demanda, y conforme al principio de libertad probatoria, le es dable al juez analizar todas las pruebas para establecer su procedencia.

Razones suficientes para revocar la decisión recurrida, máxime que la prueba testimonial es uno de medios de prueba de mayor utilidad dentro de los procesos judiciales, en especial en los laborales, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se reclaman y pretenden ser reconocidos.

Ahora, es de resaltar que si bien en este caso para la Sala no existe duda que se cumplió con ambas condiciones exigidas por el artículo 212 del CGP, y en especial, con la enunciación concreta de los hechos objeto de prueba echada de menos por la a

quo, de no evidenciarse tal exigencia tampoco habría lugar a negar la prueba testimonial, pues como lo ha indicado el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, la carga impuesta por la norma no puede conllevar a la negación del derecho sustancial y el despliegue de las actuaciones necesarias para aclarar los supuestos fácticos sobre los cuales se edifica la *litis*. Al respecto indicó dicha corporación⁵:

“En el presente caso, el *a quo* negó el decreto de la prueba testimonial porque la actora no identificó detalladamente los hechos sobre los cuales se pronunciarían los testigos. Por su parte, la interesada manifestó que los deponentes declararían «sobre lo que les conste con respecto a los hechos referidos en este proceso»; sin embargo, tal situación no es razón suficiente para que el juez se abstenga de practicar dicha prueba. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «si bien la norma consagra la exigencia de enunciar de manera concreta los hechos que serán materia de la prueba, no establece parámetros específicos para cumplir tal enunciación»⁶.

A su turno, con fundamento en los criterios orientadores de prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, el Consejo de Estado se ha referido al deber que tiene el juez de realizar una lectura integral y contextualizada de la demanda, desde la etapa de admisión hasta la sentencia.

En efecto, el artículo 228 de la Constitución Política impuso al juzgador el deber de «ver la materia real del litigio con prescindencia de la forma; le dio una capacidad de acción, y con ella, lo convirtió en un verdadero rector del proceso con poderes de interpretación auténtica, se recaba, al exigirle que los juicios deben ser expresión del derecho sustancial; y al no distinguir éste, lo extendió al procedimiento y ritulación del mismo y al acto de definición: la sentencia»⁷.

En este orden de ideas, si bien es cierto que la normativa procesal exige la enunciación concreta de los hechos que se pretenden probar a través de un testimonio, tal requerimiento no puede traducirse en un rigorismo que sacrifique valores y bienes jurídicos establecidos en normas sustanciales. En efecto, en el *sub lite*, una lectura armónica de los hechos de la demanda y la solicitud de la prueba testimonial, permite concluir que el objeto de la prueba es dar claridad frente a los supuestos fácticos sobre los cuales se edifican las pretensiones de la accionante.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicación número: 25000-23-25-000-2015-00006-01(1556-17) del 8 de marzo de 2019.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejero ponente: Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 30 de noviembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2017-01940-01(AC), actor: MAYAGÜEZ S.A.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicado: 15001-23-31-000-1994-0135-01 (12853), actor: Armando Gaitán Garzón.

Así las cosas, aunque la demandante se limitó a manifestar que los testigos llamados al proceso «declararán sobre lo que les conste con respecto a los hechos referidos en este proceso», sin precisar detalladamente cada uno de los referidos hechos, tal circunstancia no impide su recepción, por cuanto: a) el artículo 212 del Código General del Proceso no establece formas sacramentales respecto de la manera en que debe cumplirse el requisito de enunciar «concretamente los hechos objeto de la prueba»; y b) una lectura integral de la demanda permite inferir que el propósito de la accionante es demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificó el desempeño de las funciones que le fueron asignadas en el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. y que, en su sentir, hacen viable el reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas al amparo del derecho a la igualdad en las relaciones laborales.”

Así las cosas, se revocará la decisión recurrida y se ordenará decretar los testimonios solicitados por la demandada ESE Hospital Marco Fidel Suárez, ello sin perjuicio que en su momento el Juez pueda dar aplicación a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado por el artículo 7 de la ley 1149 de 2007).

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 2 de octubre de 2020 que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por el apoderado de la demandada ESE Hospital Marco Fidel Suarez, y en consecuencia, se dispone decretar la prueba testimonial solicitada por dicha entidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia, sin perjuicio que en su momento el Juez pueda dar aplicación a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado por el artículo 7 de la ley 1149 de 2007).

Sin costas en esta instancia

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

FRANCISCO ARANGO TORRES

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 113 de junio 30 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e75a5f59fae484d48471d447ad04ceb1b8a78777a2e6da27b727fa64f9af95ad

Documento generado en 29/06/2021 03:39:11 PM